

Dossier de prensa

13/05/2022 – 19/05/2022

NOTICIAS

[Viernes, 13 de mayo 2022](#)

Jose Emilio Boscá

Los precios confirman su descenso en abril, pero la cesta de la compra no para de subir, Cope ([enlace](#)).

[Domingo, 15 de mayo 2022](#)

Joaquín Maudos

Bankia: Nada es igual 10 años después, Levante, Información (PDF).

Tribuna: La economía española y el FMI, La Vanguardia (PDF).

Rafael Doménech

Rafael Doménech enumera el decálogo de retos para mejorar el bienestar social, Levante (PDF).

BBVA y la Universidad de Valencia premian a Fama Sofás por su digitalización y sostenibilidad, La Verdad ([enlace](#)).

[Lunes, 16 de mayo 2022](#)

Rafael Doménech

Escrivá quiere alargar los años de trabajo para garantizar el sistema de pensiones, pero los expertos ven necesarios ajustes más fuertes, 20 Minutos ([enlace](#)).

[Martes, 17 de mayo 2022](#)

Joaquín Maudos

Bankia: Nada es igual 10 años después, El Periódico de España (PDF).

Francisco Pérez

Arcadi España anima a aprovechar el "momento valenciano" frente a los malos augurios, Valencia Plaza y Alicante Plaza ([enlace](#)).

[Miércoles, 18 de mayo 2022](#)

Francisco Pérez

Participación en Foro Futuro: Reforma fiscal. Los expertos demandan reducir las subvenciones en el IVA y en el IRPF, Cinco Días (PDF).

PREMIOS BBVA REVOLUCIONA



ble de la sostenibilidad», destacó el decano de la Facultad de Economía de la UV. Una disertación aplicada con maestría por **Gestión Inteligente de Conflictos** (GIC), **Fama Sofás** y **Talat**, las tres empresas premiadas en la primera edición del certamen organizado por

BBVA con la colaboración de la Facultad de Economía de la UV. Obtener dicho reconocimiento ha supuesto una ardua tarea, pues el trío vencedor se ha sometido al cribado exhaustivo de las ajustadas bases de la convocatoria, así como al de los miembros del jurado —conformado por 11 destacadas personalidades del ámbito económico y docente, tanto del sector público como privado, y con representación de las tres comunidades autónomas adscritas al evento—.

En este sentido, esta primera edición constata el propósito de la entidad bancaria convocante de «poner al alcance todas las oportunidades de esta nueva era y generar impacto positivo en las empresas, familias, economía y sociedad», esgrimió Conde, «tangibilizando su meta de ayuda y acompañamiento».

Competitividad como bien público

Vicent Soler asistió al acto de entrega de los galardones en su condición de conseller de Hacienda y Modelo Económico, poco antes de dejar su cargo en la crisis del Consell dada a conocer ayer sábado. Soler defendió, durante su comparecencia, el valor de la competitividad como bien público, alineando su discurso al del decano de la Facultad de Economía, así como al del delegado de la Territorial Este de BBVA. En su opinión, «las pequeñas y medianas empresas no siempre disponen de los recursos o habilidades necesarias para acometer la transformación de sus modelos negocio», por lo que celebró la política de recuperación sustentada en los fondos europeos Next Generation, que catalogó como «auténtico Plan Marshall».

«Las pymes pueblan nuestro tejido productivo y afrontan el reto de la digitalización, que puede suponer una auténtica revolución en términos de competitividad. Vuestro valor reside —dirigiéndose a las tres empresas premiadas— en vuestra capacidad de reacción ante las coyunturas», desarrolló.

Soler insistió, además, en que los grandes esfuerzos económicos se deben capilarizar hacia la pyme y aludió a los tres grandes planes de recuperación impulsados por la Generalitat Valenciana desde 2020. Es decir, el Plan Resistir, Resistir Plus y Reactiva. En este sentido, fue tajante: las transformaciones deben acometerse de la mano de los agentes econó-

micos y estas no deben ser ajenas a lo que denominó «triple concepción de la sostenibilidad» que actúa de forma transversal. Así, admitió no solo el gran potencial innovador de las empresas valencianas, sino también la urgencia de premiar a aquellas que lo hacen bien dado el contexto de recuperación aludido anteriormente.

Además, el aún responsable de la Consejería de Hacienda y Modelo Económico no perdió la oportunidad de elogiar a la Facultad

«No solo hay dos formas de resolver los conflictos: ganar o perder. La mediación es una apuesta rentable y revolucionaria»

GEMMA PONS
CEO GESTIÓN INTELIGENTE DE CONFLICTOS (GIC)

«Hemos avanzado en la digitalización de nuestro producto poniendo a las personas en el centro de la ecuación»

FÉLIX LÓPEZ Y MANOLI SANTA
CEO FAMA SOFÁS

«Estamos viviendo una cuarta revolución industrial y, dentro de esta, otra que lo está cambiando todo: la de las personas»

MAGDALENA PAYERAS
CEO DE TALAT

de Economía de la UV, de la que fue decano, por ser «un espolón de la formación de capital humano y económico». En esta misma línea se manifestó **David Conde**, que apuntó que BBVA eligió dicha facultad como *partner* en la constitución de los premios por su «criterio, independencia, credibilidad y cercanía a la empresa».

Las tres empresas premiadas

Gestión Inteligente de Conflictos (GIC) se convirtió en la primera empresa galardonada de este certamen en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. Capitaneada por

la letrada Gemma Pons, su actividad se centra en la mediación de conflictos. Una área, a priori, convencional que, como sostuvo la CEO de la firma durante la entrega del galardón, «es una apuesta rentable». «No solo hay dos formas de resolver los conflictos: ganar o perder. La mediación está penalmente reconocida, validada y ha probado ser eficiente», defendió Pons. No obstante, aseguró que necesita modernizarse y, por ello, desde GIC incorporaron la tecnología en su modelo de negocio

al digitalizar todo su sistema de gestión. «La mediación es la única revolución que se genera a través de la paz. ¿Nos acompañáis?», animó a los asistentes del certamen en una arenga final.

El premio destinado a la demarcación de Islas Baleares fue concedido a **Talat**, una empresa dirigida a la ingeniería que, como defendió su CEO, Magdalena Payeras, «incorpora la innovación como parte de su ADN». «Estamos viviendo una cuarta revolución industrial y, dentro de esta, otra que lo está cambiando todo: la de las

personas», esgrimió. Así, cogió el testigo del clima expuesto durante la jornada que sitúa a las personas en el centro de la acción empresarial, que tiende a ser cada vez más humana. La mercantil balear incorporó, mucho antes de estar fijados, las políticas fijadas por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas bajo el firme convencimiento de que «la clave es repensar proyectos para conseguir un valor añadido en forma de eficiencia». Es el pilar fundacional de la *ingeniosofía* de Talat, cuyo fin superior es la felicidad.

Por último, **Fama Sofás** recibió el galardón de los Premios BBVA Revolucionaria en el ámbito territorial de la Región de Murcia. El nombre es premonitorio. Durante más de 50 años, esta empresa familiar se ha dedicado a crear y fabricar sofás y sillones. Una labor, como definieron Félix López y Manoli Santa, CEO de la empresa, «aparentemente nada tecnológica» que, pese a ello, ha sabido reinventarse y consolidarse más allá de las fronteras españolas. «Hemos avanzado poco a poco en la internacionalización y digitalización de nuestro producto poniendo a las personas en el centro de la ecuación», reconocieron.

Además, este proceso se ha acometido atendiendo a criterios sostenibles, pues Fama Sofás se define como una empresa altamente vinculada a políticas medioambientales. «Cuando le hablas de sostenibilidad a las personas, la devalúan. Nuestra suerte es demostrar que estos aspectos antieconómicos son buenos y nos han hecho crecer de forma continuada. El respeto al medio ambiente no es el camino idóneo para que las empresas tengan futuro, es el único camino que existe», concluyeron López y Santa.



Rafael Doménech enumera el decálogo de retos para mejorar el bienestar social

► Productividad, empleo, internacionalización, innovación o competitividad, entre otros atributos, son canales que aportan capital humano al bienestar social. Al menos, así lo sostuvo Rafael Doménech, catedrático de Análisis Económico de la UV y responsable de Análisis Económico de BBVA Research, en su conferencia «Innovación, disrupción digital y bienestar social» durante la entrega de premios. Para Doménech, además de la desigualdad o la esperanza de vida, el principal indicador del bienestar social se basa en el

consumo neto de emisiones de gases de efecto invernadero al tener en cuenta el coste social del carbono. La digitalización supone, para este propósito, un baluarte.

En este sentido, Doménech fue taxativo: «si la disrupción digital no crea empleo productivo, no generaremos riqueza suficiente como para poder repartirla». Así, entre los diez grandes retos que deben acometerse para mejorar el bienestar social se incluye la inversión en investigación y desarrollo —la paradoja actual establece una relación no lineal—, la in-

clusión del capital humano en la ecuación, la disminución de la polarización —consolida la *rutinización* al generar empleo solo en los extremos—, la promoción de la formación capaz de revertir los índices de abandono escolar o, entre otros, los garantes de igualdad.

Además, el catedrático de Análisis Económico de la UV hizo una apreciación final centrada en el objeto del premio convocado por BBVA. «Premiamos a estas empresas en la medida en que lideran un proceso determinante en la mejora del bienestar social, pues la evidencia disponible habla de un balance positivo de la disrupción digital para crear empleo y reducir la desigualdad. Va a haber costes de transición en algunas áreas y nuestra misión es evitar que eso deteriore la calidad del empleo», concluyó. **A. PUCHADES** VALÉNCIA

FORO FUTURO

Reforma fiscal

Los expertos demandan reducir las subvenciones en el IVA y en el IRPF



Los técnicos proponen acabar con los tipos reducidos en los impuestos al consumo y disminuir el gravamen general

La eliminación de las bonificaciones en los tributos a la renta permitiría reducir el tipo general

PABLO SEMPERE
MADRID

España se enfrenta al reto mayúsculo de rediseñar su sistema tributario para hacerlo más equitativo, progresivo y justo, incorporando la imposición digital y medioambiental y alineándose con los postulados europeos e internacionales. Toca pequeños ajustes en el corto plazo y reestructurar el modelo en su conjunto en un horizonte más lejano, analizando siempre el binomio ingresos-gastos para cubrir las brechas fiscales y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Hasta aquí el diagnóstico, compartido por la mayoría de técnicos y expertos. Otro asunto son las fórmulas escogidas para dar forma al desafío, así como el calendario a seguir, en el que ya no parece haber tanto consenso.

Para aterrizar el debate, el Gobierno convocó hace un año a un grupo de expertos para que redactase el libro blanco para la reforma fiscal, comprometida con Bruselas. El documento ya se encuentra en los cajones del Ministerio de Hacienda, a buen recaudo hasta que amaine la escalada inflacionista y la conmoción económica desatada con la guerra en Ucrania. La propia ministra del ramo, María Jesús Montero, ya dijo en la presentación del informe que la situación actual no invitaba a plantear “de manera inmediata ninguna subida fiscal”.

Mientras, los debates en torno a la reforma continúan. El último tuvo lu-



“En España tenemos el problema de que gravamos mucho la renta generada y poco la renta gastada”

FERNANDO FERNÁNDEZ,
IE UNIVERSITY



“Hay que atajar problemas como la ocultación de bases o las exenciones que minoran los ingresos”

FRANCISCO PÉREZ,
IVIE



“Corremos el riesgo de que la gente venga a trabajar aquí mientras sigue cotizando en otros lugares”

ALICIA GARCÍA HERRERO,
NATIXIS



“Si se eliminan algunas deducciones podría dejarse el tipo efectivo del IRPF en el entorno del 45%”

SANTIAGO CARBÓ,
FUNCAS



“España debe empezar a evaluar todos los gastos públicos, desde los directos a los incentivos fiscales”

JESÚS RUIZ-HUERTA,
GRUPO DE EXPERTOS PARA LA
REFORMA FISCAL

gar ayer en el Foro Futuro, organizado por este diario junto a Grupo Santander. En el evento, el presidente del comité de expertos y catedrático emérito de Economía Aplicada de la URJC, Jesús Ruiz-Huerta, explicó que el libro blanco –que da una serie de recomendaciones y tiene el objetivo añadido de generar debate– pone el foco en materias concretas “como la fiscalidad medioambiental y digital, la imposición societaria, la fiscalidad de las entidades económicas emergentes y la aplicación y concreción de la armonización patrimonial”.

Entre otras sugerencias, intenta adaptar y reformular los tributos con mayor

capacidad recaudatoria, el IRPF y el IVA, ensanchando unas bases imponibles que han venido erosionándose con el paso de los años. También, añadió Ruiz-Huerta, se pone especial énfasis en el debate sobre los gastos fiscales que hay que cubrir en un contexto en el que aumenta la demanda de servicios, como las pensiones y la sanidad, y en el que no se pueden descuidar indicadores como el déficit estructural, en el entorno del 4%, y la deuda pública, que seguirá por encima del 110% del PIB en el corto plazo. “España debe empezar a evaluar y justificar todos los gastos públicos, desde los directos a los incentivos

fiscales, y ver cuáles hay que cambiar o mantener”.

En este sentido, los expertos reunidos en el foro coincidieron a la hora de señalar a los impuestos al consumo como una de las figuras con más potencial de cambio para lograr un incremento recaudatorio. “Deberíamos hacer un esfuerzo como país para disminuir los gastos fiscales y las bonificaciones y exenciones, por ejemplo en el IVA, a la vez que reducimos tipos. Gravamos mucho la renta generada y poco la renta gastada”, detalló Fernando Fernández, profesor de Economía del IE University.

También vio margen para acabar con algunos ti-

pos reducidos el catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas, Santiago Carbó, principalmente para hacer que España se acerque a los niveles de recaudación que manejan la mayoría de países del entorno.

España, prosiguió Ruiz-Huerta, es el socio de la Unión Europea en el que un mayor porcentaje de la base potencial tributa al tipo reducido del IVA, con 33 categorías que se benefician de una tasa del 10%. A partir de aquí “los datos de recaudación son contundentes”. Al comparar la recaudación del IVA con el consumo estamos en la posición 25 de la UE-

27. Vemos que los mayores ingresos a través de este impuesto se dan en los países en los que predomina el tipo general”. Dejar de abusar de las tarifas reducidas y superreducidas, o incluso acabar con ellas, permitiría a España obtener una recaudación extra del entorno de los 30.000 millones de euros anuales, según los datos que manejan los expertos.

En este punto, una vez claro que esta podría ser una de las primeras palancas de la eventual reforma tributaria, tocaría centrarse en los detalles más concretos, por ejemplo en una posible reducción del tipo general del 21%. “Una de las maneras de dotar de fiabilidad



De izquierda a derecha y de arriba abajo, Jesús Ruiz-Huerta, presidente del grupo de expertos; Santiago Carbó, director de estudios financieros de Funcas; Alicia García Herrero, economista jefe para Asia Pacífico en Natixis; Fernando Fernández, profesor de Economía del IE University; José Antonio Vega, director de CincoDías, y Francisco Pérez, director de Investigación del Ivie.

al sistema fiscal español es moverse hacia un sistema de tipo general de IVA, a cambio de ser capaces de generar una tarifa única más baja de la actual", dijo Fernández. El presidente del grupo de expertos recordó que en el libro blanco se baraja y cuantifica la posibilidad de fijar una tarifa común del 15%.

Renta

Más allá del IVA, añadió Fernández, podría hacerse algo similar en el IRPF con el objetivo de ir hacia sistemas fiscales más simples, eficaces y con bases amplias "que eviten problemas añadidos". Esta eliminación de parte de las bonificaciones, que en opinión de los expertos a veces tienen difícil justificación y dan pie a la opacidad, permitiría a su vez bajar el tipo en el impuesto sobre la renta. "Si se eliminan algunas deducciones se podría bajar el tipo efectivo por ejemplo al entorno del 45%, para alejarnos de ese 55% o 60% que se ve en muchas autonomías", señaló Carbó, quien también propuso la deflacción del impuesto debido a los elevados niveles de inflación registrados.

Ruiz-Huerta también propuso aunar en las futuras reformas la supresión de parte de los incentivos con un sistema de compensaciones a las rentas más bajas. A su vez, el presidente del grupo de sabios hizo un alegato en defensa del IRPF, el tributo "que más representa una Europa de ciudadanos, donde la gente se retrata a la hora de hacer la declaración del impuesto y puede

ver si realmente funcionan las cosas desde el punto de vista del ajuste económico y de redistribución".

La fiscalidad como eje nivelador, apuntó **Francisco Pérez**, profesor emérito de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y **director de Investigación del Ivie**, es el punto sobre el que debe pivotar el debate. Se deben atajar todos los "problemas que tienen que ver con la ocultación de bases, con las exenciones que minoran los ingresos y que a veces son opacas y con los tipos impositivos reales a los que se enfrentan los hogares, siempre recordando que el sistema fiscal debe tener la capacidad de nivelar y de convencer". Tal y como resumió, en España suele pecarse de aspirar a tener "servicios públicos como los que hay en el norte de Europa sin estar dispuestos a pagar por ellos".

La futura reforma, añadieron los expertos, también exige de concreción y una hoja de ruta marcada para que la ciudadanía pueda prepararse y tomar decisiones pensando en el largo plazo. Este asunto se hace más importante, si cabe, en lo relativo a la fiscalidad verde, que debe diseñarse de manera cuidadosa, programada e informada, "ya que el cambio de modelo no será gratis e implicará nuevos gastos", recordaron Carbó y Pérez.

Otros asuntos como la armonización patrimonial entre regiones o las exenciones a determinadas actividades empresariales siguen enfrentando, como es costumbre, a los expertos.

Gasto y eficiencia

► **Control.** El control de los recursos públicos de cara a evitar el malgasto de los ingresos es una de las máximas en las que insistieron todos los expertos reunidos ayer en el Foro Futuro. En este punto, además de dejar trabajar a organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) a la hora de evaluar las diferentes partidas de gasto, **Fernando Fernández** insistió en la necesidad de cambiar el paradigma de que "el servicio público implica paradigma de lo público". Por eso, aseguró, "la competencia en la provisión de educación y sanidad genera eficiencia. Inducir competencia privada en la gestión de servicios públicos tradicionales puede ayudar a reducir ese gasto", añadió. También lo creyó así **Santiago Carbó**, quien propuso estimular en el ámbito privado todo lo que contribuya a rebajar las tensiones financieras, "por ejemplo en el ámbito de las pensiones". En su opinión, y eso es algo que el libro blanco de los expertos recoge, todas las medidas deben basarse "en evidencias, en cuestiones más técnicas que ideológicas".

Las trabas de la movilidad laboral al gravar la renta

P. SEMPERE
MADRID

Una buena parte del debate que rodea a cualquier tipo de reforma fiscal suele centrarse en cómo mejorar los instrumentos impositivos que ya existen para hacerlos más eficientes. Sin embargo, en asuntos como la transformación digital o la transición verde se hace necesario pensar en palancas innovadoras que puedan hacer frente a situaciones igualmente novedosas. Una de ellas tiene que ver con la movilidad internacional.

"En algunos ámbitos, máxime desde la pandemia, observamos que la base fiscal del factor trabajo ya no es tan estable respecto a la del capital. Las personas trabajan en lugares remotos y no siempre cumplen con los requisitos o exigencias tributarias, por lo que hay que pensar en nuevas fórmulas". Con estas palabras quiso introducir **Alicia García Herrero**, economista jefe para Asia Pacífico en Natixis, profesora en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Hong Kong e investigadora Senior del *think tank* Bruegel, un punto que a su juicio debe tenerse en cuenta en cualquier debate sobre la imposición de la renta.

En el modelo económico actual, en el que el teletrabajo se abre camino y abundan los ya conocidos como nómadas digitales, la base fiscal va desapareciendo y cambiando por el factor trabajo y de movilidad. Estos perfiles, por ejemplo, se dedican a trabajos en remoto transfronterizos y suelen beneficiarse de visas de nómada digital dirigidas a personas altamente cualificadas, escapando, en ocasiones, de la tributación tradicional.

Aunque las reformas en el IVA o en IRPF pueden ayudar "de forma aislada a guardar el equilibrio tenemos que entender que ya

estamos en otro equilibrio diferente, por lo que hay que diseñar medidas más agresivas para mantener la base fiscal y el gasto", dijo **García Herrero**.

A su juicio, en España "corremos el riesgo de que la gente venga a trabajar aquí mientras sigue cotizando en otros sitios". Este problema, que puede agravarse con países de fuera de la UE por la dificultad añadida de llegar a acuerdos, puede redundar en una brecha fiscal todavía mayor. "Igual es necesario repensar el papel del Estado más allá de su papel redistributivo para empezar a generar ingresos fiscales extra que permitan mantener el gasto social".

En este punto, y aunque el tema escapa del libro blanco redactado por los expertos por su vertiente global, el presidente del grupo de sabios, **Jesús Ruiz-Huerta**, recordó que siempre es aconsejable tomar decisiones a gran escala y de forma coordinada precisamente para asegurar la supervivencia de las figuras tributarias. En el ámbito internacional, como ocurre en otros aspectos en el Estado de las autonomías, la carrera a la baja puede redundar en la desaparición de los principales impuestos.

El teletrabajo y la deslocalización ha quitado peso a la base fiscal del factor trabajo

La carrera a la baja entre países o autonomías puede acabar con ciertos impuestos

Análisis

¿Qué ha cambiado en esta última década
en el sector financiero?
Pues, en realidad, bastante.

BANKIA: NADA ES IGUAL DIEZ AÑOS DESPUÉS



JORDI CUENCA

Se acaban de cumplir diez años desde el rescate de Bankia por el Estado, simbolizado en el relevo en su presidencia: de un Rodrigo Rato sin apoyos en ninguna parte a un José Ignacio Goirigolzarri redivivo tras su salida tres años antes del BBVA como consejero delegado. Es de todos conocida aquella historia: los más de 22.400 millones de euros de coste para los contribuyentes que conllevó la intervención de la entidad cofundada por Bancaja y Caja Madrid; el escándalo de las participaciones preferentes, que finalmente fueron resarcidas a los clientes total o parcialmente, según los casos; el proceso judicial por la salida a Bolsa, que a la postre exoneró a los acusados; el uso de las tarjetas *black*, que llevó a la cárcel a Rato y otros beneficiarios... ¿Pero qué ha cambiado en esta última década en el sector financiero?

Pues, en realidad, bastante. Seguramente, el aspecto más visible haya sido la reordenación en el sector, con cuatro hitos sustanciales. Por un lado y, precisamente, la absorción de Bankia por CaixaBank, ya consumada y anunciada en septiembre de 2020, en lo que se vendió como una medida anticipatoria de los cambios que iba a provocar la pandemia del coronavirus desatada a principios de aquel año. Poco después, Unicaja y Liberbank lanzaron su propia operación de integración. Por las mismas fechas fracasó el intento de unión entre BBVA y Sabadell. En junio de 2017, el Santander se quedó por un euro el Popular.

Como recuerda el director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Joaquín Maudos, desde aquella efeméride las 45 cajas de ahorros que había antes de la crisis de 2008 han devenido en dos -Caixa Ontinyent y Caixa Pollensa-, dado que las demás o han desaparecido o se han transformado en bancos. También ha vivido su transformación el cooperativismo de crédito, singularmente a través de Cajamar. La reducción del número de competidores por las fusiones realizadas ha provocado «un aumento de la concentración del sector, que es hoy en día muy superior a la media europea», según el también catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia.

Este proceso ha comportado,

por contra, una reestructuración histórica en el sector. Como apunta Maudos, la red de oficinas ha caído un 58%, con lo que ha regresado al nivel de hace casi 50 años. Los despidos han ido en paralelo, aunque en condiciones envidiables para trabajadores de otras actividades. El experto opina que «ha sido

La concentración en el sector financiero es hoy en día superior a la media europea

necesario para reducir costes y mejorar la rentabilidad, que es el gran reto del sector». El otro gran acicate ha sido la imparable digitalización, que está expulsando desde las oficinas a los móviles y ordenadores -también a los cajeros- la operativa más corriente como sacar dinero, consultar saldos o hacer transferencias. La pérdida de presencia física la ha pagado de forma particular la España rural y más despoblada, debido a la extensión de la exclusión financiera. Es decir, más y más localidades que se quedan sin oficina bancaria. De hecho, han empezado a proliferar los *offices*, o sea, sucursales ambulantes.

También es cierto que la banca, tal vez por pasarse de frenada, ha tenido que dar marcha atrás y anunciar -veremos en qué queda- servicios específicos para su clientela de mayor edad y con menos acceso al mundo digital. Todo ello a resultados de la campaña de Carlos Sanjuan, un médico valenciano jubilado.

Por otro lado, en la última década la banca ha sufrido un adelgazamiento en su negocio en España como consecuencia del desapalancamiento que ha realizado el sector privado, tanto empresas como familias. Por ese motivo, «el stock vivo de crédito ha caído un 35%, lo que supone una pérdida de 660.000 millones de euros», apunta Maudos, quien añade que «también se ha producido un aumento de la solvencia, por las mayores exigencias de los reguladores», en un contexto donde el sector se ha enfrentado a lo nunca visto: seis años consecutivos con el precio del dinero en el cero por ciento, lo que ha mermado sus ingresos. Y también una insólita pandemia que auguró para la banca un severo agujero por los impagos empresariales, finalmente no consumados.

Las políticas de concesión de créditos parece que son fruto de haber aprendido las lecciones del boom inmobiliario. Se reclaman más garantías y no se financia, como entonces, hasta el 120 % del precio de una vivienda. También hay provisiones más severas para cubrir impagos. Y, por cierto, el banco malo -la Sareb- creado en la Gran Recesión para asumir los activos tóxicos de las entidades intervenidas, sigue penando una década después. ■

BANCA

El cierre de sucursales se agudiza en el Mediterráneo y Madrid

EPE
Madrid

La reducción del número de oficinas bancarias en España, un fenómeno por otro lado común a distintos países europeos, no es exclusivo de las áreas más despobladas, donde ya es un grave problema de «exclusión financiera» para muchos ciudadanos, sino algo generalizado y que afecta en mayor medida al arco mediterráneo y Madrid, informa Efe.

Los datos del Banco de España revelan que en los últimos 10 años han cerrado en España prácticamente 21.000 oficinas -de las 40.103 que había en diciembre de 2011 a las 19.104 de final de 2021-, el 60 % en Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, lo que supone una reducción del 52,3 % que en mayor o menor medida ha afectado a todas las comunidades y a todas las provincias.

En concreto, en Cataluña han dejado de funcionar en la última década 4.398 sucursales (más de una de cada cinco); de ellas 3.213 en la provincia de Barcelona; en Madrid, 2.946; en Andalucía, 2.848; y en la Comunidad Valenciana, 2.569.

En términos relativos, en Tarragona han cerrado entre 2011 y 2021 el 67,8 % de las sucursales bancarias; en Barcelona, el 66,5 %; en Girona, el 62,7 %; en Castellón, el 60,8 %; en Valencia, el 59,8 %; en Valladolid, el 57,3 %; en Salamanca, el 57 %; y en Madrid, el 56,5 %.

Por el contrario, donde ha habido menos cierres es en Cuenca (16,6 %), un total de 39; Albacete (26,9 %), Ciudad Real (29,8 %), Badajoz (30,4 %) y Teruel (30,6 %).

Este fenómeno, multiplicado con las fusiones de los últimos años, se inició en la última década del siglo pasado en provincias poco pobladas del interior peninsular, como Palencia, Ciudad Real, Soria, Ourense, Lleida, Cuenca y Huesca, con clausuras del 5 al 10 % de las sucursales, mientras todavía crecía el número de oficinas en otros lugares como Madrid (45,5 %), Badajoz (36,7 %) o Almería (36,2 %). ■



Rato y su sucesor al frente de Bankia, Goirigolzarri, el 9 de mayo de 2012.

Jordi Cuenca

Bankia: Nada es igual 10 años después

Esta semana, concretamente el lunes, se han cumplido diez años desde el rescate de Bankia por el Estado, simbolizado en el relevo en su presidencia: de un **Rodrigo Rato** sin apoyos en ninguna parte a un **José Ignacio Goirigolzarri** redivivo tras su salida tres años antes del BBVA como consejero delegado. Es de todos conocida aquella historia: los más de 22.400 millones de euros de coste para los contribuyentes que conllevó la intervención de la entidad cofundada por Bancaja y Caja Madrid; el escándalo de las participaciones preferentes, que finalmente fueron resarcidas a los clientes total o parcialmente, según los casos; el proceso judicial por la salida a Bolsa, que a la postre exoneró a los acusados; el uso de las tarjetas 'black', que llevó a la cárcel a **Rato** y otros beneficiarios... ¿Pero qué ha cambiado en esta última década en el sector financiero?

Pues, en realidad, bastante. Seguramente, el aspecto más visible haya sido la reordenación en el sector, con cuatro hitos sustanciales. Por un lado y, precisamente, la absorción de Bankia por CaixaBank, ya consumada y anunciada en septiembre de 2020, en lo que se vendió como una medida anticipatoria de los cambios que iba a provocar la pandemia del coronavirus desatada a principios de aquel año. Poco después, Unicaja y Liberbank lanzaron su propia operación de integración. Por las mismas fechas fracasó el intento de unión entre BBVA y Sabadell. En junio de 2017, el Santander se quedó por un euro el Popular.

Como recuerda el **director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Joaquín Maudos**, desde aquella efeméride las 45 cajas de ahorros que había antes de la crisis de 2008 han devenido en dos: Caixa Ontinyent y Caixa Pollensa, dado que las demás o han desaparecido o se han transformado en bancos. También ha vivido su transformación el cooperativismo de crédito, singularmente a través de Cajamar, que ha crecido en la Comunitat Valenciana sobre todo tras la absorción de Ruralcaja y la creación de un grupo del que forma parte dos decenas de rurales de la autonomía más otras cinco que se han integrado también en el Banco de Crédito Social Cooperativo que capitanea la entidad con



Rodrigo Rato y su sucesor al frente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, el 9 de mayo de 2012 | Efe

EL SECTOR FINANCIERO ESPAÑOL HA CAMBIADO DE FORMA RELEVANTE DESDE LA INTERVENCIÓN DEL BANCO EN 2012

sede en Almería.

La reducción del número de competidores por las fusiones realizadas ha provocado «un aumento de la concentración del sector, que es hoy en día muy superior a la media europea», según el también catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València.

Este proceso ha comportado, por contra, una reestructuración histórica en el sector. Como apunta **Maudos**, la red de oficinas ha caído un 58%, con lo que ha regresado al nivel de hace casi 50 años. Los despidos han ido en pa-

ralelo, aunque en condiciones envidiables para trabajadores de otras actividades. El experto opina que «ha sido necesario para reducir costes y mejorar la rentabilidad, que es el gran reto del sector». El otro gran acicate ha sido la imparable digitalización, que está

La digitalización, la absorción por CaixaBank o el fin del Popular son hitos de la década

expulsando desde las oficinas a los móviles y ordenadores -también a los cajeros- la operativa más corriente como sacar dinero, consultar saldos o hacer transferencias. La pérdida de presencia física la ha pagado de forma particular la España rural y más despoblada, debido a la extensión de la exclusión financiera. Es decir, más y más localidades que se quedan sin oficina bancaria. De hecho, han empezado a proliferar los ofubuses, o sea sucursales ambulantes.

También es cierto que la banca, tal vez por pasarse de frenada, ha tenido que dar marcha y anunciar

-veremos en qué queda- servicios específicos para su clientela de mayor edad y con menos acceso al mundo digital. Todo ello a resultados de la campaña de **Carlos Sanjuan**, un médico valenciano jubilado.

Por otro lado, en la última década la banca ha sufrido un «adelgazamiento» en su negocio en España como consecuencia del despalancamiento que ha realizado el sector privado, tanto empresas como familias. Por ese motivo, «el stock vivo de crédito ha caído un 35%, lo que supone una pérdida de 660.000 millones de euros», apunta **Maudos**, quien añade que «también se ha producido un aumento de la solvencia, por las mayores exigencias de los reguladores», en un contexto donde el sector se ha enfrentado a lo nunca visto: seis años consecutivos con el precio del dinero en el cero por ciento, lo que ha mermado sus ingresos. Y también una insólita pandemia que auguró para la banca un severo agujero por los impactos empresariales, finalmente no consumados.

Las políticas de concesión de créditos parece que son fruto de haber aprendido las lecciones del boom inmobiliario. Se reclaman más garantías y no se financia, como entonces, hasta el 120 % del precio de una vivienda. También hay provisiones más severas para cubrir impagos. Y, por cierto, el banco malo -la Sareb- creado en la Gran Recesión para asumir los activos tóxicos de las entidades intervenidas, sigue penando una década después.

ECONOMÍA VERDE

TRANSPORTE

9,8%

de las emisiones de gases invernadero en España son responsabilidad del transporte de mercancías por carretera

El camión eléctrico será competitivo en tres años

Un estudio advierte de la necesidad de adelantar el fin de la venta de camiones con motores de combustión

Lorena Farrás Pérez

El transporte de mercancías por carretera es fundamental para la economía y el funcionamiento de la sociedad, pero es también uno de los principales culpables de la crisis climática. Se estima que mueve el 95% de las mercancías en un país altamente dependiente de este método de transporte, como es el caso de España. Como consecuencia, es responsable del 9,8% de las emisiones de gases de efecto invernadero (un 8,19% corresponde a los camiones, y el 1,63% restante, a las furgonetas).

Su descarbonización es uno de los mayores retos en materia de acción climática. Y España no va por el buen camino, según el estudio *Posibles opciones y vías tecnológicas para conseguir un transporte de mercancías por carretera sin emisiones de carbono en España*.

Realizado por la consultora Cambridge Econometrics, el informe alerta de la necesidad de adelantar las fechas previstas para el fin de la venta de furgonetas con motores de combustión interna (prevista para el año 2035) y de camiones con esa tecnología (establecida para el 2040). Insta también a tomar medidas adicionales centradas en la reducción anticipada del uso de ese tipo de vehículos contaminantes.

La buena noticia, que llega también de la mano del estudio de Cambridge Econometrics, es que se estima que los camiones eléctricos serán competitivos en torno al 2025 con respecto a los de combustión interna. Sin embargo, para que los vehículos de pila de combustible de hidrógeno sean también competitivos habrá que esperar hasta el 2030.

Estas estimaciones pueden variar en función de la mayor o menor rapidez con la que estas tecnologías (baterías, sistemas de recarga y células de combustible) y combustibles (hidrógeno verde) puedan bajar de coste, así como la evolución del incremento esperado de los costes de los combustibles fósiles (diésel, gasolina, gas natural), ahora disparados a causa de la invasión rusa de Ucrania.

En este sentido, el responsable de políticas de transporte de mercancías de Transport & Environment (T&E), Carlos Bravo, advirtió en la presentación del estudio que “no será posible conseguir la descarbonización total del transporte de mercancías sin apostar por las tecnologías cero emisiones en camiones y furgonetas. Lamentablemente,

en España, hay un gran desfase entre las políticas actuales y las que serían adecuadas para dotar al sector de una trayectoria coherente para lograr ese objetivo”.

Además de invertir más en innovación para avanzar en la electrificación y el despliegue de infraestructuras de recarga, en la presentación del informe se apuntaron otras medidas para reducir la huella de carbono del sector del trans-

porte de mercancías. Estas son una mayor apuesta por el transporte ferroviario y el uso de la digitalización como herramienta para optimizar consumos y reducir el retorno en vacío.

Por su parte, la secretaria general de Transportes y Movilidad del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, María José Rallo del Olmo, indicó que “solo renovando la flota se podría reducir las emisiones de forma significativa”. La secretaria general explicó que la edad media del parque automovilístico español es de 13,1 años, 2,3 años más que la media europea.

Bravo puso esperanzas en los próximos cambios normativos: “Además de la actual revisión de la normativa en materia de emisiones de CO₂ de las furgonetas y, próximamente, de los camiones, por parte de la Unión Europea, la discusión del actual anteproyecto de ley de Movilidad Sostenible abre en España un amplio abanico de posibilidades de mejora en este ámbito”.

La Unión Europea y España como país miembro se ha comprometido a alcanzar la neutralidad climática para el año 2050. ●

DATO

Un parque envejecido. La edad media de los vehículos es de 13,1 años en España, una de las más altas de la UE

13,1



El 95% del transporte de mercancías es por carretera

El transporte ferroviario y la digitalización son también claves para reducir las emisiones

Joaquín Maudos

Universitat de València
IME-Cunef

La economía española y el FMI



El reciente informe del FMI sobre la economía mundial muestra el elevado grado de incertidumbre que rodea sus previsiones por la confluencia de varios acontecimientos: el impacto de la guerra de Ucrania (de duración y consecuencias muy inciertas), las dificultades en el control de la pandemia en China y el restablecimiento de las cadenas globales de producción. La suma es una revisión a la baja de 0,8 puntos del crecimiento del PIB mundial en el 2022 y de 0,2 puntos en el 2023, para situarse en el 3,6% en ambos años.

Los estrangulamientos en la oferta de las materias primas tras el conflicto bélico, que se superpone a los desajustes entre los shocks negativos de oferta y la pujante demanda que aún persisten tras la pandemia, son elementos de gran preocupación por el intenso impacto que están teniendo en la inflación. Para el FMI, el aumento del IPC se va situar en el 2022 en el 5,7% en las economías avanzadas y en el 8,7% en las economías emergentes y en desarrollo. Son tasas muy por encima del objetivo deseado del 2% por los bancos centrales, lo que anticipa una subida de tipos de interés más dañina cuanto más endeudada esté una economía.

En este complicado entorno, la buena noticia es que España va a ser, según el FMI, una de las economías desarrolladas que más van a crecer este año (un 4,8%), algo que debe ser relativizado ya que la economía española fue una de las que más cayeron en el 2020 (-10,8%) y creció menos que las economías desarrolladas en el 2021 (5,1% frente a 5,2%). Más me cuesta creer la previsión de inflación para España del 2023, ya que el FMI la sitúa en el 1,3%, una décima menos que la eurozona, algo difícil de lograr viniendo del 5,3% en el 2022 y teniendo en cuenta que habrá efectos de segunda ronda.

Uno de los elementos de más preocupación de las estimaciones del FMI para España son las finanzas públicas. En concreto, sitúa el déficit público estructural en el 4,1% del PIB en el 2022 y lo mantiene hasta el 3,9% en el 2027. Una mala noticia para la sostenibilidad de la deuda pública, que solo se prevé que caiga 1,8 puntos de PIB en cinco años (del 116,4% del PIB en el 2022 al 114,6% en el 2027), por lo que el FMI no anticipa que España vaya a hacer ningún esfuerzo de control del déficit en breve. Estamos hablando de una desviación estructural ingresos-gastos cada año en torno a los 50.000 millones de euros, que debería obligar al Gobierno a plantear una hoja de ruta como reclaman, entre otros, la Airefy y el Banco de España. Y más ante el escenario de subida de tipos al que nos enfrentamos. No me extraña que el FMI no confíe en que controlemos el déficit estructural si el Gobierno plantea subir las pensiones con el IPC. Hagan cuentas: un punto de inflación son 1.713 millones de gasto extra en pensiones, por lo que si el FMI acierta en su previsión, son 9.079 millones más de gasto público. Y si el que acierta es el Banco de España (que sitúa la inflación en el 7,5%), la cifra supera los 12.000 millones de euros. |

Desconfianza
Uno de los elementos más preocupantes de las estimaciones del FMI para España es el de las finanzas públicas